

¿Quién Garantiza a los Supervisores?

Nucleoelectricidad y Desconfianza

- ★ En Tela de Juicio, los Organos de Vigilancia en EU
- ★ Ocurren Fugas, Contaminación, Descuido Sistemático
- ★ La Responsabilidad se Diluye en Intereses de Grupo

LORENZO MEYER

NUEVA YORK, 1o. de noviembre.—Hace tiempo quedó señalado que generalmente los mexicanos, como conjunto, llegamos tarde al banquete de la civilización. Tal afirmación bien puede servir como una definición de subdesarrollo. La energía nuclear, nos guste o no, es parte de nuestra civilización y es justamente uno de los campos a los que vamos a entrar cuando ya un buen número de los invitados al banquete hace tiempo que están sentados pero, además, tienen serias dudas sobre la conveniencia de haber asistido.

El 14 de octubre, una vez pasadas las elecciones municipales de Veracruz el gobierno anunció por sí y ante sí que había autorizado poner en marcha la primera unidad de la planta nucleoelectrica de Laguna Verde (LV). Afirmó, claro está, que antes de tomar tal decisión se había informado a las comisiones especializadas del Congreso, lo cual, en la práctica, fue exactamente igual a haber informado a la nada.

Así pues, 23 años después de que se iniciaron los estudios sobre la viabilidad del proyecto (tarde, siempre tarde) y 12 años después de que se inició la construcción de la planta y tras el gasto de miles de

SIGUE EN LA PAGINA DIEZ

Sigue de la primera plana

millones de dólares, por fin vamos a tener el dudoso privilegio de que nuestro gobierno maneje directamente la energía contenida en el átomo, una energía que se puede liberar pero no controlar de manera satisfactoria, en especial sus residuos, cuya peligrosidad se mantiene por miles de años.

Yo estoy lejos de ser un experto en la materia, y no tengo ningún elemento para dudar de las seguridades que ha dado la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre lo adecuado de los estudios hechos en torno de la viabilidad económica y técnica del proyecto y lo idóneo del equipo instalado. Espero que las once razones que la Semip y la Sedue han dado al público en grandes desplegados, sean realmente razones basadas en conocimientos adecuados y buena fe. De todas maneras, hay motivos de sobra para que nos preocupemos por el porvenir de LV. Uno de esos motivos es el sistema institucional, y por tanto burocrático, de controles dentro del cual van a operar la controvertida planta los técnicos de la C.F.E. Dada la naturaleza de nuestro sistema político, un sistema donde la irresponsabilidad es una de sus características centrales —¿o es que ya nadie se acuerda de la leche contaminada por el accidente de Chernobyl y que la Conasupo adquirió en Irlanda y distribuyó? ¿O de la manera en que se manejó el auxilio inmediato y el de largo plazo a los damnificados por el terremoto de 1985 o por el ciclón de este año?—, no es posible dar por supuesto que la supervisión cotidiana de la planta se llevará a cabo tomando realmente en cuenta el interés general y no el de la burocracia, cuyo interés creado no es sólo el de manejar LV sino construir otras plantas similares. Y no se crea que la base de mi duda es meramente teórica: está avalada nada menos que por la experiencia de lo sucedido en Estados Unidos.

Entre las once razones con que las autoridades justificaron públicamente el 15

Nucleoelectricidad y Desconfianza

de octubre la puesta en marcha de LV, está una que bien puede dar pie a temores más que a seguridades. Según el desplegado a parecido ese día en la prensa, el proyecto de construcción de la planta de LV y el plan de protección de la población civil en caso de accidente, han sido supervisados, entre otros organismos, por el Institute of Nuclear Power Operations de Estados Unidos. Bueno, pues resulta que justamente hoy está en tela de juicio la eficacia del conjunto de las instituciones y burocracias públicas norteamericanas encargadas de velar por el mantenimiento de la seguridad de las numerosas plantas nucleares de este país, en particular de las que son propiedad del gobierno. A los mexicanos bien nos vale conocer algo de ésta no muy brillante página de la historia administrativa de Estados Unidos, pues encierra una lección clara.

Ultimamente han salido a la luz pública algunos de los problemas que por años han afectado las operaciones de la planta productora de plutonio de Savannah River, en Carolina del Sur. Ahora se sabe que en esa planta, y desde 1957, han ocurrido una serie de accidentes, incluido uno que pudo haber provocado la fundición del reactor C. Aparentemente, los reportes de esos accidentes nunca llegaron a las cabezas de la cadena de mando ni, mucho menos, al público y, por lo tanto, nunca hubo una investigación a fondo. Hoy se sabe que en algún punto de la cadena burocrática —el punto exacto se desconoce— alguien retuvo la información y los procesos de producción de material radiactivo continuaron como si nada hubiera pasado. Por si lo anterior no fuera suficientemente serio, ahora resulta que los depósitos de material ya usado, los desechos, no fueron bien contruidos y han estado contaminando por años los mantos acuíferos de la vecindad. Peor aún, ese problema no es exclusivo de una planta; la localizada en Rocky Flats, Colorado, ha dejado escapar sobre Denver humos con alto contenido de plutonio, y en la

de Fernald, Ohio, los operarios han permitido que sus depósitos de desechos contaminen los mantos de agua y que salieran a la atmósfera, de manera sistemática y por años, polvos radiactivos en grandes cantidades.

Algunos ejemplos del resultado concreto de estos accidentes y descuido sistemático por parte de quienes deberían haber actuado con mayor responsabilidad, han sido presentados al público por la prensa y la televisión. Ejemplos actuales y dramáticos, pero no atípicos, son los de un niño al que le tuvieron que amputar ambas piernas debido al cáncer que desarrolló por trabajar en las vacaciones en la huerta que el padre compró al lado de una de las plantas mal manejadas. Una comunidad completa de 14 mil personas han demandado por 300 millones de dólares a la empresa que maneja la planta de Fernald, por los daños causados por los desechos de uranio arrojados al río cercano.

Los viejos trabajadores de la planta de Savannah River parecen propensos a contraer leucemia en una proporción que doble el promedio nacional. Los granjeros de Richland, estado de Washington, acaban de enterarse que por vivir cerca de la planta de Hanford Reservation, han estado expuestos a niveles de radiación 10 veces superiores a los emitidos durante el accidente de Chernobyl, en la Unión Soviética, etc.

Se puede señalar que los ejemplos que he citado de descuido injustificable en el manejo de materiales nucleares en un país que tiene la mayor experiencia en el uso de tan peligroso combustible, se refieren a plantas dedicadas a la producción de material destinado a usos militares y no comerciales, y que por lo tanto, no se aplican al caso de LV. Sin embargo, creo que pese a ello, los ejemplos son pertinentes para nosotros por dos razones. La primera es que la peligrosidad del proceso fundamental es independiente de su objetivo último: producir armas o electricidad. La segunda, que es más importante, es esta: todas las plantas que hoy son consideradas como

un peligro público efectivo y no simplemente potencial, son manejadas por el gobierno, justo como es el caso de LV.

Lo que ha salido a la luz pública en Estados Unidos en relación al manejo irresponsable, criminal, de las plantas mencionadas en los párrafos anteriores y de otras once más, es que con el pretexto de que se trata de una actividad secreta, el control externo sobre su funcionamiento fue nulo o casi. En la planta de Savannah River, y según palabras del propio secretario de Energía, John S. Herrington, los vigilantes y los vigilados se hicieron indistinguibles unos de los otros; el interés común fue más fuerte que su filiación institucional formal. Las noticias sobre los 30 accidentes ocurridos en esa planta a lo largo de su historia se reportaron internamente pero en algún punto no muy alto de la cadena de mando esos reportes se perdieron; la responsabilidad se disolvió. Desde hace años, un grupo de Pennsylvania ha demandado del Departamento de Energía que se le permita el acceso, para su estudio, a los archivos médicos de los 300 mil trabajadores de las plantas nucleares gubernamentales que han sido expuestos a diferentes niveles de radiactividad desde el inicio de la actividad de esa industria; hasta la fecha la respuesta a la petición ha sido negativa, alegando la confidencialidad y el que tales estudios y han sido llevados a cabo por especialistas contratados por el gobierno y cuyo resultado ha sido satisfactorio.

No hay nada de raro en este esfuerzo de la burocracia por limitar el acceso de grupos y fuerzas ajenas a la información, que en principio no debiera ser secreta, sobre las condiciones de seguridad de las operaciones de las plantas nucleares. A estas alturas sabemos bien, como Max Weber lo explicó desde hace buen tiempo, que la burocracia crea rápidamente intereses propios, distintos y a la larga opuestos a los del resto de la sociedad. Así, en momentos críticos, esos intereses particulares, de grupo, tienden a poner todos los obstáculos posibles pa-

ra evitar que la estructura a la que se pertenecen sea sometida al escrutinio y a la crítica externa, no importa cuán legítimo sea el interés representado por quienes demandan acceso e información.

En un sistema político como el mexicano, donde la experiencia de decenios nos ha mostrado que sencillamente no hay ningún mecanismo para obligar a feudos de poder como Pemex o la CFE a permitir una supervisión real y constante de su actividad por parte de intereses externos, ¿quién va a vigilar el funcionamiento cotidiano de LV y a denunciar, de inmediato y a tiempo, los peligros y los accidentes? Si pese a contar Estados Unidos con un sistema político abierto, con una conciencia pública despierta por lo que se refiere a la contaminación ambiental, con un Congreso relativamente bipartidista, dispuesto a responder a las preocupaciones de los electores, y con verdadero poder para llamar a cuentas a las agencias del Ejecutivo además de recursos técnicos suficientes para poder enfrentar la complicada naturaleza del problema si, repito, pese a todo ello se pudieron cometer las increíbles infracciones a los reglamentos de seguridad que hoy se han descubierto, pues entonces ¿qué podemos esperar nosotros? La estructura antidemocrática mexicana, de probada irresponsabilidad y prepotencia burocráticas —particularmente a escala federal, donde la presidencia apenas si ahora, y con trabajos, está teniendo algún contrapeso— es la peor en que se puede colocar a una planta atómica, cargada no sólo de material atómico sino de todo el peligro potencial que ello implica.

Como todo indica que ya se metió a México en el club de la nucleoelectricidad, es responsabilidad de los miembros de la oposición en el Congreso desarrollar, en la medida de sus limitadas posibilidades, un sistema de control sobre las actividades de la CFE en LV y no dejar el manejo de la energía atómica en manos de los técnicos. El asunto es demasiado peligroso como para que nos podamos dar tal lujo.